

---

*Cerrará Cuando el Poder Rinda Cuentas*

## **Sigue el 68 Como Herida Abierta**

- ★ La Deuda con la Sociedad Todavía no Está Saldada
- ★ Derrota Moral y Política de Díaz O. y del Sistema
- ★ Fracasó el Empeño por Reintroducir la Democracia

LORENZO MEYER

Hoy hace 25 años el movimiento estudiantil iba en ascenso. Aquel 5 de agosto los estudiantes y profesores del Politécnico, apoyados por los de la UNAM, la Normal y Chapingo, llevaron a cabo una gran marcha de protesta por el allanamiento de la Escuela de Ciencias Biológicas por la tropa. Se hablaba ya de desaparecidos, pero aún no era posible vislumbrar el trágico final. Hoy, a 25 años de distancia, lo deseable sería ver al 68 como historia, como un trauma superado, pero desafortunadamente no es el caso.

Muchas cosas han cambiado en México en el último cuarto de siglo pero otras no. Y es justamente por eso, por lo que no ha cambiado, que el 68 se mantiene vivo. Los muertos de aquel entonces —¿quiénes y cuántos fueron?— aún no descansan en paz en la memoria colectiva. La deuda histórica que el poder

tiene desde entonces con la sociedad, y la que la sociedad tiene frente a sus muertos, todavía no está saldada. Hace veinticinco años un sector social minoritario pero poseedor de una vitalidad sorprendente, se encontraba esperanzada y entusiastamente empeñada en una lucha frontal contra el autoritarismo en que había nacido. Buscaba iniciar la reforma, verdadera y a fondo, del sistema político posrevolucionario. Quienes salían entonces a las calles a demandar una vida democrática a la que tenían derecho, buscaban abandonar su condición de súbditos para llegar a la de ciudadanos. Consideraban que si bien en esa lucha estaban físicamente desarmados, de su lado tenían una fuerza superior a la de las armas: la razón; la razón histórica, razón pura y simple. Se equivocaron, y pagaron un precio muy alto por su desafío.

La meta de los insurgentes del 68 no era llevar el enfrentamiento al terreno de la violencia. No, su objetivo era otro: ganar la calle y las conciencias para abrir el camino hacia una reforma de fondo y permanente en la relación entre sociedad y gobierno. Detrás de las demandas específicas —las del pliego petitorio—, había otra, más profunda y francamente revolucionaria: la de transformar al aparato gubernamental mexicano de un fin en un medio; convertir al hasta entonces **Supremo Gobierno** en un instrumento al servicio de la voluntad ciudadana —voluntad que apenas se estaba formando—, como correspondía a la democracia que México pretendía ser pero que nunca había sido. Como todos bien sabemos, este empeño por reintroducir la democracia en México, fracasó. Al final de cuentas, los ciudadanos resultaron ser pocos y su razón cívica no pudo sobreponerse a la razón de las armas; el verano democrático desembocó en el terrible y gris otoño del presidencialismo sin límites.

En octubre del 68, la voluntad del Presidente Gustavo Díaz Ordaz se impuso sobre quienes le habían desafiado. Se impuso empleando el instrumento que Max Weber consideró que era lo distintivo del Estado: la violencia. Una violencia que pretendió ser legítima pero que, desde luego, no lo fue entonces ni después, cuando una "Brigada Blanca" llevó al cabo una "guerra sucia" contra los que, frustrados por la impotencia de la protesta cívica, decidieron respon-

der a la fuerza con la fuerza.

Si el 68 sigue vivo, es porque la naturaleza de la relación entre el poder del Estado y la sociedad, que desembocó en las matanzas del 68 y de 1971, no ha cambiado. La contradicción entre autoridades y ciudadanos que estalló hace cinco lustros en la ciudad de México, no ha sido resuelta y persiste como uno de los grandes problemas nacionales del México de fin de siglo.

En 1968, la violenta imposición de la voluntad presidencial sobre quienes la cuestionaban, fue la victoria del autoritarismo sobre un germen de democracia moderna. Fue la victoria contundente y fácil de las armas sobre una voluntad ciudadana desarmada y en proceso de gestación. Esa voluntad ciudadana estaba encarnada en un grupo de personas tan jóvenes, que muchas de ellas aún no estaban en edad de asumir formalmente la ciudadanía. La victoria presidencial fue sólo aparente, pues el correr del tiempo pronto la transformó en una derrota moral de fondo tanto para Díaz Ordaz en lo personal, como para la presidencia y para el sistema político en su conjunto. Al abandonar Díaz Ordaz la seguridad de Los Pinos, se inició abiertamente el proceso histórico en su contra —que no por informal resultó menos real— y también en contra de todo el entramado de poderes y complicidades que apoyó y afirmó dentro y fuera del gobierno la "solución final" del 2 de octubre. La tropa y la policía fueron quienes dispararon sobre los manifestantes, pero fueron las cúpulas del partido oficial, de las grandes corporaciones —sindicatos, empresarios—, fue la prensa, la televisión y la Iglesia, quienes de manera activa o con el silencio cómplice, apoyaron a la presidencia sin límites y cerraron realmente la posibilidad del tránsito pacífico a la democracia.

Ahora bien, a un cuarto de siglo de distancia, queda claro que el meollo del problema planteado por el 68, es que esa derrota moral y política del diazordacismo y del sistema político posrevolucionario en su conjunto, no significó la victoria de su opuesto: de los valores ciudadanos encarnados por el movimiento estudiantil. Lo trágico es que lo acontecido hace veinticinco años fue una pérdida neta para todos. Lo que perdió entonces el régimen autoritario no lo ganó la sociedad.

Es verdad que mucho ha

cambiado desde el 68 y su colofón en el 71. En 1968 éramos unos 47 millones, hoy somos por lo menos 40 millones más. En 1968 los que vivíamos en poblaciones con 15 mil o más habitantes —eso que se considera población urbana— no llegábamos a 50%, pero hoy sobrepasamos 60%. Hace 25 años la esperanza de vida del mexicano al nacer era de 62 años y hoy casi llega a los setenta. La población mayor de 15 años analfabeta era en 1968 26% del total y hoy la proporción se ha reducido a la mitad. El ingreso promedio per cápita actual de 2,250 dólares es claramente superior al de hace un cuarto de siglo; el nivel de vida general ha aumentado.

La lista de los indicadores del cambio social y económico se puede ampliar. Sin embargo, ese muro de cifras de progreso no logra ocultar otra realidad: la del no cambio. Hoy como ayer, México sigue sin encontrar la salida al subdesarrollo. La distribución del ingreso, un indicador clave de la existencia o ausencia de justicia sustantiva, nos dice a gritos que seguimos estancados. En 1968, 20% de la población acaparó 56% del ingreso disponible; dos decenios después, en 1988, la proporción del ingreso que recibió ese 20% de mexicanos que se encuentra en la cúspide de la pirámide social, apenas si ha cambiado, pues fue de 53%. En una economía cada vez más regida por el mercado, como es ahora la nuestra, la distribución del ingreso tiende a concentrarse, por ello es muy probable que hoy, en 1993, estemos justamente donde estábamos en 1968 o, incluso, que hayamos retrocedido. Pero hay otra concentración —que en buena medida explica la primera— y donde también seguimos sin avanzar: la del poder político.

Es en el reino de lo político —en la forma y en el ejercicio del poder— donde queda bien claro que, pese a todo lo que ha ocurrido en México de 1968 a la fecha, las cosas siguen siendo básicamente como eran entonces. Poco después del, y a la luz del, 68, Daniel Cosío Villegas concluía: "las dos piezas principales y características del sistema mexicano son un poder ejecutivo —o, más específicamente, una Presidencia de la República— con facultades de una amplitud excepcional, y un partido político oficial preponderante". La corrupción de la vida pública que entonces enmarcaban presidencia y su partido, se

mantiene hoy tan viva como entonces, y por las mismas razones.

Ese presidencialismo con facultades "de una amplitud excepcional" que tanto molestó a la conciencia liberal de Cosío Villegas, continúa siendo la característica determinante de toda la compleja estructura del poder en México. La sociedad, pese a ser hoy más densa, más consciente y sofisticada de lo que era veinticinco años atrás, continúa sin poder ponerle al presidencialismo las riendas y el freno de la división constitucional de los poderes. La estructura de la economía se ha transformado de manera sorprendente: la centralidad que hace dos decenios y medio tenía el Estado como productor ha cedido su lugar al mercado. Sin embargo, pese al adelgazamiento económico del Estado, aún no hay ningún grupo privado, por fuerte que sea en números o dinero, que pueda constituir una verdadera barrera frente al poder presidencial. Al contrario, algunas de las mayores concentraciones de recursos privadas que operan hoy en el país —la televisión, los teléfonos, la banca o la industria automotriz, para mencionar algunos—, siguen siendo muy dependientes de, y muy vulnerables frente al, poder político. Este puede mantenerles o negarles concesiones, aplicarles de manera estricta o laxa las disposiciones fiscales, protegerles o abandonarles a su suerte frente a la competencia del exterior, apoyarles o no en sus negociaciones laborales, etcétera.

En 1968 no había realmente un sistema de partidos en México; el PRI era, de hecho, el principio y el fin de toda política partidaria. El Partido comunista recibió entonces golpes muy duros, y el PAN más parecía un grupo de presión que un auténtico partido político. Las elecciones de 1964 o las de 1970 fueron una mera formalidad. Desde cierta perspectiva, se puede argumentar que el panorama ha cambiado. En 1967 el PRI tenía el total de gobernadores y senadores y 83.5% de los diputados federales. Hoy, el PAN controla tres gobiernos estatales, hay tres senadores y 130 diputados federales de oposición real más 50 de oposición prefabricada, y un número reducido pero significativo de gobiernos municipales no priistas. Esta situación es el resultado de un cambio en el sistema de partidos: el PAN es ya un verdadero partido y el PRD, pese a

los esfuerzos en contrario del gobierno, está en vías de consolidarse. México, pues, pareciera tener, por fin, un sistema de partidos. Sin embargo, las apariencias engañan.

En nuestro país aún no hay un auténtico sistema de partidos porque los de oposición deben contender contra un partido de Estado, que es mucho más Estado que partido. El PRI sigue siendo hoy lo que ha sido desde fines de los años treinta: el instituto electoral de la presidencia. En el Congreso, la oposición tiene voz pero no voto, pues ahí la mayoría priista, secundada por los pseudo partidos (PARM, PPS y PFCRN) no es otra cosa que la cadena de transmisión de la voluntad presidencial. Sin un Congreso independiente, no hay la menor posibilidad de un poder judicial auténtico (o, para el caso, de un Banco de México autónomo). Tres gobernadores panistas —uno designado y neutralizado por un legislativo priista— urgidos de una buena relación con la presidencia para recibir recursos federales, no han podido ni querido ser la cuña que transforme el viejo centralismo ilegítimo en el federalismo que debería ser.

Finalmente, está el problema electoral. Hoy a diferencia del México de los sesenta, ya hay elecciones competidas. Sin embargo, lo que no hay es elecciones creíbles. Y una competencia sin resultado —bienes como sucedió en 1988, desemboca en una especie de 68 incremental: una presidencia todopoderosa que impone los resultados en favor de su partido; un partido que no es tal y que vence pero no convence. En México, la legitimidad del poder no es democrática sino simplemente pragmática, pues no proviene del voto sino de lo que ocurre después; es el resultado práctico del ejercicio mismo del poder. Mientras esta situación no cambie, los mexicanos no podrán llegar a la condición que buscaron los jóvenes del 68: a la de ciudadanos.

En conclusión, el drama de 1968 sólo será historia cuando el presidencialismo irresponsable —irresponsable porque no tiene que dar cuenta efectiva de sus actos a nadie, pues no existe poder social que le haga contrapeso— también sea historia. Entonces, y sólo entonces, tendremos la posibilidad de pasar de la condición de súbditos a la de ciudadanos, y sólo entonces podremos mirar a 1968 sin el temor de sentir que estamos en deuda con nuestros muertos.